



Aquíes

Observaciones Metropolitanas

Construyendo
un programa
de acción vecinal

Nº1. Ciudad de Granada,
marzo de 2017



AJUNTAMIENTOS
GRANADA

Granada: brecha social y atonía ciudadana.

Juan Manuel Barrios Rozúa

Modelos contrapuestos

La dictadura de Franco nos dejó una Granada fracturada, con barrios obreros como la Chana y el Zaidín que habían sido deliberadamente concebidos como satélites indeseables de la ciudad, con chabolismo en la Virgencica o Bola de Oro, y con un Albaicín que ni siquiera parecía pertenecer a la ciudad. Los primeros años de la democracia se desarrollaron con un alto grado de movilización por parte de los sindicatos y las asociaciones de vecinos, y tuvieron como regidores municipales a personas que aún creían en el estado del bienestar o, en cualquier caso, no podían permitirse desoír a una ciudadanía organizada. Durante los tres primeros lustros de la democracia se avanzó en la integración de los barrios, a la par que se edificaba el estado del bienestar. La tendencia se invirtió gradualmente en los años 90, cuando comenzó a cuestionarse la viabilidad del estado del bienestar, mientras Granada vivía una drástica transformación impulsada por la apertura de la circunvalación. Una parte importante de su población apostó por un modelo de vida basado en el coche y en la casa individual, y el municipio de Granada pasó a ser el centro de una enmarañada área metropolitana a la cual sus alcaldes, temerosos de perder sus parcelas de poder, no quisieron dotar de cohesión.

Cuando los municipales hablan de los problemas de las ciudades españolas no es raro que surja una comparación con esos ideales de desarrollo que encarnan Munich, Copenhague u Oslo, con sus tranvías, parques y civismo ciudadano. Sin embargo, la política económica y social española no está orientada a aproximarnos a tales ciudades, aunque se las evoque, sino al modelo que nos ofrece

Estados Unidos. Privatizaciones, culto al coche, valores individualistas... Desde los cimientos económicos al imaginario nos ofrecen a ese país como un modelo, con la excepción, es curioso, de sus ciudades. Algo hay en Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans e incluso Nueva York que no seduce al español, esa fractura social que hace las ciudades amorfas e inseguras. En ciudades tan próximas culturalmente a nosotros como Santiago de Chile, Lima o México D.F. tenemos una versión más contrastada del modelo neoliberal. En estas urbes los barrios ricos gestionan su abundancia, los pobres su miseria, y la segregación de clases y de etnias es drástica, con la consiguiente violencia en las relaciones sociales.

Los que nos gobiernan desde Madrid o Bruselas, desde el FMI o el Banco Mundial, nos dicen que si queremos prosperidad debemos sacrificar la “rigidez” de los derechos laborales y sociales en el altar de la competitividad. Sus políticas son, mucho más que las decisiones de los ayuntamientos, las que marcarán la configuración de nuestra área metropolitana. Ciertamente hay retos y problemas de carácter local, como el transporte urbano, la salubridad del aire, los parques o la conservación del patrimonio histórico; pero el gran dilema sobre el futuro de Granada está en si evolucionará hacia una ciudad socialmente integrada, o sea, si se reforzará el estado del bienestar, o si la creciente brecha social que vive España se trasladará a la configuración urbana dando lugar a una ciudad fracturada. De hecho, la Granada actual presenta algunos rasgos de ciudad fracturada, si bien la mayoría de ellos en forma embrionaria y lejos todavía de los brutales desgarros que podemos encontrar allende el Atlántico.

Síntomas de fractura

Lo que más ha destruido la cohesión social en los últimos años han sido las dos reformas del mercado laboral, pues han agravado el problema de la precariedad de los contratos y ampliado la capa de lo que en Estados Unidos se ha llamado *working poors*, o sea, personas a las cuales el trabajo no les saca de la pobreza, algo especialmente dramático en un país con altas tasas de desempleo. Para combatir el incremento del número de personas en situación de pobreza no se han reforzado los programas de integración social (ayudas a la vivienda, becas, fórmulas de salario social...). No obstante, seguimos teniendo en pie los pilares básicos del estado del bienestar, o sea, la sanidad, la educación y un sistema público de pensiones, aunque en proceso de deterioro.

En una Granada con una población cada vez más envejecida no es preciso señalar las graves consecuencias que tiene el deterioro del sistema público de pensiones, del que dependen no solo los jubilados o personas con incapacidad laboral, sino muchas familias castigadas por el desempleo o la precariedad. Las pensiones han sido un elemento clave de ese famoso “colchón familiar” que ha amortiguado los efectos de la crisis, un colchón cada vez más delgado.

La sanidad había alcanzado en España altas cotas de efectividad. En los últimos años, sin embargo, los recortes han disparado las listas de espera. El objetivo del gobierno central es la privatización de la sanidad para establecer un modelo análogo al estadounidense —que como sabemos es caro y profundamente desigual—, y no está clara la actitud de la Junta de Andalucía, que ha optado por la privatización de determinados servicios y aplica los recortes impuestos por el gobierno central sin una verdadera voluntad de resistencia. La polémica sobre el nuevo hospital de Granada, que en lugar de sumarse al existente ha provocado una extraordinaria confusión, ha sido el desencadenante de unas masivas protestas que expresan la indignación ciudadana por la saturación de las consultas y las listas de espera.

Pocas cosas nos dicen más sobre una sociedad, incluidas sus ciudades, que la educación. Si nos comparamos con la España de hace 40 años vemos un ratio de alumnos reducido a la mitad y unas instalaciones mucho mejores. Ahora bien, los logros de la enseñanza pública están amenazados por los recortes, que se aprecian, por ejemplo, en un profesorado que va envejeciendo, o en el fomento de la enseñanza privada y concertada, la cual tiene su mejor carta de presentación en la selección social de los alumnos. Una de las consecuencias más lamentables de este modelo educativo dual es el tráfico de coches y autobuses que llevan a los alumnos de una parte a otra de la ciudad y sus municipios periféricos, un tráfico que colapsa algunas calles céntricas (calle Molinos, paseo de los Basillos, etc.) y los nudos de acceso a la circunvalación. Todos sabemos lo fluido que es el tráfico en Granada cuando es jornada festiva en la educación, aunque sea día laborable.

Estos pilares básicos del estado del bienestar son fundamentales para la integración de los colectivos de inmigrantes que al calor de la burbuja inmobiliaria llegaron masivamente a España. La educación ayuda a sus hijos a tener una integración cívica y laboral. A este respecto es preciso señalar que la ciudad multicultural, presentada como un respeto a la diversidad y a la riqueza cultu-

ral, suele encerrar serios problemas de desigualdad social, endogamia y descontento. Bajo el manto del respeto a la diferencia nos encontramos las más de las veces con un cínico ejercicio de dejadez institucional. Los problemas que incuba esta multiculturalidad suelen acabar en la incompreensión, la xenofobia y el racismo. Bruselas o París han podido comprobar recientemente lo que implica desentenderse de la suerte de los habitantes de sus banlieue.

La inseguridad que generan la desigualdad y la pobreza tienen como principales víctimas a los habitantes de los barrios pobres, pero el temor no se queda en sus límites. En América vemos como las clases acomodadas cercan sus barrios y procuran desplazarse solo a lugares vigilados. En Granada y su área metropolitana son cada día más numerosas las urbanizaciones con seguridad privada y nos vamos acostumbrando a una creciente vigilancia y “protección” del consumo. La existencia de videocámaras y la constante presencia de guardias de seguridad nos indican que en un lugar no son bienvenidos los que no quieran adquirir ciertos bienes o servicios. Ocurre cada vez más en las calles comerciales y las plazas del casco histórico. Pero estos no dejan de ser lugares públicos en los que no puede establecerse el derecho de admisión. Los centros comerciales suponen un salto cualitativo, pues el espacio de socialización es privado, está controlado por guardias de seguridad y todo se orienta al consumo. Desde la apertura de la ronda de circunvalación en 1992 este modelo tan estadounidense (mall) se ha ido implantando con creciente fuerza (centro comercial Neptuno, Serrallo Plaza, centro Alameda de Pulianas, centro Alhsur de La Zubia) hasta culminar en el gigantesco Nevada Shopping en noviembre de 2016.

En el aspecto de la vivienda estamos lejos del desgarro americano; ni El Serrallo tiene viviendas de un lujo insultante ni Almanjáyar es un barrio de chabolas. Pero no hay lugar para la autocomplacencia. Según un informe de Amnistía Internacional elaborado en el 2015, España solo dispone de un 1,1% de vivienda social, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido. Que nuestro país tenga un enorme parque inmobiliario, una parte de él desocupado, no nos libra de los desahucios o de que muchas familias deban destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar hipotecas. Ese derecho a una vivienda digna mencionado por la Constitución es un objeto de descarnada especulación. Vivimos en un país donde se penaliza la reventa de entradas para espectáculos, pero se ha practicado sin sanción legal la compraventa de viviendas: durante la burbuja, y todavía hoy por parte de “fondos

buitres”, se han comprado casas para a continuación revenderlas más caras sin aportarles ningún valor. La oportunidad de convertir en vivienda pública los bienes inmobiliarios de los bancos que han recibido ayudas y rescates se ha dejado pasar. Recordemos que al empezar la crisis había en España 3,4 millones de viviendas vacías.

Política institucional y asociacionismo

Si bien el modelo de sociedad nos será impuesto desde instancias ubicadas más allá de nuestra región, no es poco lo que puede hacerse desde un ayuntamiento voluntarioso. Desgraciadamente la capacidad de intervención de los municipios viene menguando desde el comienzo de la crisis. El primer problema al que se enfrenta cualquier ayuntamiento en España es la falta de recursos. El modelo de financiación municipal del régimen del 78 implica una escasa aportación desde el Estado a las arcas municipales, y obliga a los municipios a depender en buena medida de lo recaudado por la actividad constructiva, lo cual fomenta las recalificaciones y la concesión demasiado alegre de licencias de obras, o sea, la especulación. Por ello es preciso dotar a los municipios de más recursos procedentes de la recaudación de impuestos por Hacienda. Evidentemente si la tendencia sigue siendo aligerar las cargas impositivas a los que más tienen, vamos por mal camino. Además, parece que hay en el gobierno un deseo de limitar las competencias municipales, particularmente en cuestiones sociales. Es una recomendación del Fondo Monetario Internacional y demás organizaciones de ideología neoliberal el suprimir o debilitar los poderes locales y regionales para concentrarlos en el Estado, que a su vez también se quiere adelgazar en sus recursos; la razón es alejar la política de las presiones ciudadanas para tener un único interlocutor, el Estado, que sea distante con los ciudadanos y cómodo interlocutor para las grandes empresas. En consecuencia, contar con unos municipios con recursos y competencias debe ser un objetivo prioritario de quienes desean una sociedad más justa y solidaria.

En una Granada que ha sido gobernada en los últimos doce años con mayoría absoluta por un partido implicado en graves casos de corrupción, puede ilusionar poco este llamamiento a reforzar el municipio. Sin embargo, nunca debe olvidarse que es desde las instituciones desde donde más se puede trabajar por el buen desarrollo de una ciudad. El voluntarismo que desprecia la política institucional y apela a la calle, puede explicarse ante la impotencia que surge al ver en el poder a políticos hostiles, pero no deja de ser una manera de engañarse a uno mismo.

No quiero decir con ello que una ciudadanía estructurada y reivindicativa carezca de una capacidad de intervención estimable. Lo prueba que los equipos municipales que se han regido esta ciudad hayan hecho lo posible por desmovilizar o cooptar las asociaciones de vecinos y a todo colectivo que pudiera emerger por una demanda urbana. Pero también hemos visto que un alcalde enrocado en una mayoría absoluta y con una prensa dócil puede permitirse un desprecio olímpico hacia aquellas demandas ciudadanas que chocan con su proyecto o su ideología. La actual fragmentación política abre mejores perspectivas, porque las protestas en la calle y las demandas canalizadas a través del tejido asociativo tienen más posibilidades de ser escuchadas y atendidas.

El deterioro del estado del bienestar y las nuevas amenazas que se ciernen sobre él han hecho reaccionar a una parte de la población, pero, al menos si nos atenemos a los resultados electorales y a la pasividad en la calle, sigue dando la impresión de que hay una mayoría social poco preocupada o incluso satisfecha con la evolución de los acontecimientos. Esto no es tan sorprendente. La Granada de los años 70, aquella que recuerdan los electores maduros y ancianos, era una ciudad sin parques, con plazas invadidas por coches, contados columpios para niños, muchas calles sin asfaltar, pocos y malos autobuses, colegios mal dotados y unas autoridades municipales elegidas directamente por un gobierno dictatorial. Mucha gente cuando vuelve de Marruecos señala que ese país le recuerda a la España de hace cuarenta años. Esta sensación de haber mejorado mucho desde el fin de la Dictadura parece confirmar el mito liberal del progreso, sobre todo cuando los medios de difusión de noticias nos muestran ese progreso como un fenómeno natural y no como el producto del trabajo, de las luchas sindicales y vecinales, y de una gestión municipal que, al menos en la primera década de la democracia, se desarrolló en un clima de elevada politización.

Si una parte de la población se siente más o menos satisfecha con la evolución de Granada y de sus vidas, no es menos cierto que son muchas las personas en precariedad económica o con falta de perspectivas que albergan descontento e incluso rencor ante la creciente brecha social. El problema es que este segmento de la sociedad muestra una apatía asociativa descorazonadora. Muchas son las explicaciones que podemos aducir, desde el lavado de cerebro por los medios de difusión de noticias hasta la disuasoria burocratización que arrastran las organizaciones sindicales, pero me atrevería a señalar como un problema mayor y específico de nuestro tiempo la abrumadora oferta de ocio. La nuestra

es la sociedad del ocio-estrés, o sea, la de sufrir el permanente dilema de tener que elegir a qué afición nos dedicamos. Estamos desbordados por el ocio, que es amplísimo tanto para las personas de alto poder adquisitivo como para las que tienen poco. Queremos hacer tantas cosas y consumir tanto producto cultural que no tenemos tiempo para aburridas reuniones o manifestaciones. Los típicos comentarios escépticos hacia las movilizaciones sociales por parte de quienes deberían estar interesados en ellas, encierran las más de las veces un cómodo deseo de no ser importunado.

Mostrar como interesantes los problemas cercanos, los de nuestro propio barrio, y situarlos en una perspectiva económica y social más amplia es un reto. Lograr que una asamblea o una reunión sea un lugar de sociabilidad apasionante se me antoja una tarea titánica. Pero como historiador no puedo menos que recordar que el asociacionismo y la lucha por objetivos concretos y factibles da frutos. El pesimismo al respecto no es síntoma de inteligencia, sino de pereza.

A mediados de los años 70 la zona que hoy conocemos como Vergeles se había urbanizado con grandes bloques de viviendas y el Ayuntamiento había dado permiso para edificar algunos más en los pocos solares que quedaban. Como era habitual en el desarrollismo franquista no se habían previsto unos mínimos servicios para el nuevo barrio ni exigido contraprestaciones a los promotores inmobiliarios. En 1979 los vecinos cercaron con macetas un solar e iniciaron una entusiasta lucha para que allí no se levantara otro bloque. Tres años después se inauguraba la plaza de Fontiveros, una manzana ajardinada al modo de los square británicos. Hoy cualquiera que pase por allí creería que ese agradable y amplio espacio verde es producto de un sabio planeamiento municipal, pero existe porque los vecinos se organizaron.

Movilizaciones de aparente modestia como esta hacen una ciudad mejor, con parques abiertos a todos, en las antípodas de esos muros de la vergüenza que como en Lima o Sao Paulo aíslan y esconden barrios enteros.